

**LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA
EJECUCIÓN DE LA PENA:
IMPLICACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES**

NAYIBE DEL PILAR FUENTES QUIROZ

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



FACULTAD DE DERECHO

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL

SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. 2015

LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA:

IMPLICACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES¹

Por: Nayibe del Pilar Fuentes Quiroz²

RESUMEN:

En la actualidad Colombia está sufriendo el flagelo de innumerables problemáticas sociales, tanto en las regiones como en todo el país. Todas ellas han exigido por parte del pueblo una radical solución. Dentro de las cuales destaca la poca claridad de la política criminal que se está ejecutando en el país, dado que los índices de inseguridad siguen en aumento existiendo una percepción general de ineficacia por parte del aparato judicial a la hora de administrar una verdadera justicia, resultando infructuoso el incremento del número de medidas de aseguramiento intramuros (así como el aumento en las penas), en el marco de una justicia que todavía tiene rasgos de ser retributiva a pesar de la entrada en vigencia del concepto de justicia restaurativa. Con este tipo de política, se ha querido introducir un incentivo negativo en contra de la delincuencia, a modo de factor disociador de la misma en la población. El efecto adverso que ha causado, y al parecer ha sido ignorado, es la inflación de las cifras de hacinamiento carcelario y consecuentemente, una gran crisis de derechos humanos en relación con los internos. El presente artículo aborda la problemática desde la perspectiva del art. 63 del Código Penal, con lo cual se explora una alternativa de solución razonable para la misma.

PALABRAS CLAVE:

Hacinamiento, Ejecución de la Pena, privación de la libertad, sustitutos.

¹ Artículo de investigación presentado para optar por el título de Magister en Derecho en Procesal Penal, Universidad Militar Nueva Granada.

² Abogada de la Corporación Universitaria de Costa CUC, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, candidata a Magister en Derecho Procesal Penal, Universidad Militar Nueva Granada, Santa Fe de Bogotá, D.C.

THE CONDITIONAL SUSPENSION OF PERFORMANCING PENALTY AND ITS LEGAL AND SOCIAL IMPLICATIONS³

By: Nayibe del Pilar Fuentes Quiroz⁴

ABSTRACT:

Today Colombia is suffering the scourge of countless social problems, both in the regions and across the country. All of them have demanded from the people a radical solution. Within which highlights the lack of clarity of its criminal policy, because it has been showing a trend towards increasing the number of penalties as intramural assurance (and years) in the framework of a justice that still has traits of being retributive despite the enactment of the concept of restorative justice. With this policy, it has been tried to introduce a disincentive against crime, for the same disruptive factor in the population. The adverse effect it has caused, and has apparently been ignored, is the inflation on quantity of overcrowding and consequently, a human rights crisis in connection with the prisoners. This article addresses the issue from the perspective of art. 63 of the penal code, whereby a reasonable alternative to the same solution is explored.

KEYWORDS:

Overcrowding, Completion of Pena, deprivation of liberty, substitutes.

³ Article of research as a requirement for obtaining the Master degree in procedural Criminal Law, military University Nueva Granada.

⁴ Lawyer of the University Corporation University of Costa CUC , specialized in Criminal Law and Criminology candidate to be Master in Criminal Procedural Law Military College of New Granada , Santa Fe de Bogota, Colombia

1. INTRODUCCIÓN

El Derecho como ciencia social es evolutivo -por su misma naturaleza- así como la sociedad humana también lo es, realidad que no es ajena al ordenamiento jurídico colombiano, pues como lo evidencia su mismo desarrollo han sido innumerables los cambios realizados en él, cabe acotar que dentro de este desarrollo han existido eventos coyunturales en los cuales los cambios realizados a este sistema ha sido de repercusiones exorbitantes. Uno de los eventos más significativos -dentro de este discurso- fue la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 produciendo efectos de gran magnitud tanto así que la misma noción de Estado cambio, pasando de una observancia absurda de la ley, a salvaguardar el interés general, aplicando los principios rectores estipulados en la Carta Magna, sin desconocer las garantías mínimas de cada una de las personas que habitan en el territorio colombiano, este tipo de Estado denominado por la misma Constitución como Estado Social de Derecho, repercute intrínsecamente en cada una de las ramas del Derecho. Como sucedió en el Derecho Penal colombiano que desde el nuevo milenio tuvo varias reformas en caminadas a dar por sentado como base misma de todo el sistema el respeto por la dignidad humana, y en este orden de ideas una de las acciones de restructuración que se realizó en materia penal fue la introducción de un sistema de justicia restaurativa, entendida como la búsqueda de la resocialización de quien cometió un injusto y manifestada en la voluntad del Estado de disponer una justicia premial, en favor de los involucrados en la comisión de conductas punibles; dicho cambio -de manera quizás impredecible-, terminaría confrontando los sujetos primordiales dentro de este sistema: i) las víctimas de las conductas delictivas, ii) la sociedad y iii) el sujeto pasivo en el proceso penal⁵, dado que se confronta el derecho a la verdad, a la justicia, y la reparación de las víctimas, con el hecho de garantizar los mínimos derechos que tiene los presuntos responsables durante todo el trámite procesal correspondiente, además de enfrentarse con las exigencias de la sociedad para que se consolide una verdadera percepción de seguridad jurídica en esta nación.

El dilema se resume en dos situaciones: i) se reprime y castiga, o ii) se otorgan beneficios y se reinserta socialmente como lo manifiestan los profesores Cid & Larrauri (2005), en el primer contexto, se quiere que cada una de las personas condenas por algún

⁵ se habla de sujeto pasivo en el proceso penal pues quien presuntamente es responsable en la comisión de una conducta punible, dentro del trámite procesal y en cada una de las etapas del mismo, se le es llamado de diferentes maneras, como indiciado, imputado y acusado.

tipo de delito sean llevadas en el término de la distancia a centros penitenciarios, incluso esta corriente idealista demanda que dentro de los procesos penales de manera indiscriminada los investigados sean remitidos a centros carcelarios como medias preventivas, produciendo que el crecimiento de la cifra de internos está excediendo de continuo a la capacidad penitenciaria del país, y a su paso se vulneran un número significativo de derechos humanos. En el marco de la segunda perspectiva, los beneficios otorgados en el espíritu de la reinserción social, ha venido provocando un incómodo malestar en la misma sociedad al pensar que la seguridad jurídica que tanto anhelan no se ha protegido al dejar a los delincuentes libres aparentemente sin razón alguna, por lo cual se critica su poca efectividad al no materializar el cumplimiento de una justicia real gestando el deseo practicar como se hacía en antaño la justicia privada, sin embargo en muchos casos este pensamiento colectivo resulta infundado pues no se comprende la razón misma por la cual no se profieran medidas de aseguramientos a los imputados, dado que esto no significa impunidad, sino que por el mismo devenir del proceso no resulta prudente llevar a la cárcel a cierto tipo de personas⁶

Al confrontar estas dos perspectivas se puede exponer ciertas críticas; en primer lugar resulta inexplicable cuáles son o han sido los impedimentos financieros o técnicos por los cuales no se ha incrementado el número de centros penitenciarios que pudieran diseñarse bajo un modelo auto-sostenible o de producción y brindar un mejor calidad de vida a los privados de la libertad debido a que este punto resulta complejo e indefinido, por otra parte se introdujo o adoptó la alternativa de beneficios –en algunos casos educativos- a través de un modelo de justicia restaurativa que busca básicamente reintegrar el daño material y moral en todos los involucrados causado por la comisión del injusto así como crear una salida a la crisis penitenciaria del país, asunto que queda en boga de la política educativa y social del gobierno (Etxebarria, 2007 p. 20)

De ahí que las críticas y el descontento entre la población civil, surjan debido a que definitivamente no existe una debida socialización ni clarificación de las metas de los fines esenciales del Estado, ni de los desafíos que en conjunto deben asumirse para que el modelo propuesto, sea cual sea, retributivo o restaurativo, funcione. Se trata sin más de la delgada línea entre el paternalismo de Estado y un Estado leviatán, un Estado que

⁶ en este sentido hay que tener en cuenta que se necesita del cumplimiento de ciertos elementos para no asignar medidas de aseguramiento

“devora a sus habitantes” directa o indirectamente; es otras palabras, se trata de políticas criminales que yacen huérfanas y que están afectando tanto a los internos como a la población civil.

Dada la prevalencia de una filosofía restaurativa en la aplicación Pena, uno de los mecanismos existentes para tratar la problemática del hacinamiento carcelario, vestigio o derivado de una justicia retributiva y de la seguridad de la sociedad, es la tendencia garantista con respecto a los imputados y allanados para reducir y/o prevenir ostensiblemente el número de encierros temporales o innecesarios. Sin embargo, y hasta en cierta contradicción, se ha observado por otra parte, una respuesta sensible a la presión ciudadana y de los medios, habituados todos a la justicia retributiva (y con cierta razón ante la ausencia o poca visibilidad del resto del sistema restaurativo), que logra que el gobierno ajuste su política criminal a los reclamos a veces desproporcionados de la sociedad, para que ésta se sienta más segura y a gusto, asunto que se ha estado concretando en un alza general de las penas y una ausencia casi absoluta de programas de reinserción social. Se podría pensar que se trata de un subsidio a la inconformidad más que una real comprensión o dimensión de la situación.

Así entonces, cabe preguntarse si esa tendencia vista en las últimas reformas legales está simplemente evadiendo el deber ser del nuevo sistema Penal –la resocialización-, y se está enviando cada vez más personas a diferentes grados de libertad sin que se esté cumpliendo el propósito integral arriba señalado, dado que uno de los grandes causantes de los conflictos (para el caso sociedad sistema penal) aparte de la dinámica del cambio-resistencia al cambio, es precisamente la incertidumbre, la información imperfecta, o la difuminación de la frontera entre la discrecionalidad y la arbitrariedad, riesgos que hay que tener en cuenta en virtud de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Ahora bien, sabiendo que la reforma al artículo 63 del Código Penal, consistente en la amplitud de los años por pena, requeridos para beneficiar con ello a una mayor cantidad de imputados, tiene características de ser una medida paliativa y casi que desesperada, es necesario volver, clarificar y acentuar los fines esenciales del Estado que también conciernen a la población privada de la libertad y replantear el curso y la dinámica de la resocialización en las personas que reciben los beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la Pena y otros subrogados penales, para hacer de éstos, mecanismos más eficaces dentro de la política criminal del país, encaminados a lograr un

funcionamiento más coherente de la misma con sistema penal, y más armónica con los derechos humanos. En pocas palabras, se está llamando la atención al hecho de que el modelo restaurativo de justicia, tiene aún varios elementos que de fondo le hacen tropezar debido a que avanzan en dos direcciones diferentes en la práctica por el hecho concreto de que lo que se busca, que es restaurar a ambas partes en conflicto, cuenta cada vez más con menos recursos que garanticen dicha exigencia, en razón de lo arriba señalado.

1.1 Planteamiento del Problema:

En consecuencia, la presente investigación busca responder al siguiente interrogante: ¿Cuál es la pertinencia al aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la pena como medida para solucionar las problemáticas sociales del colapso en el sistema penitenciario y carcelario en Colombia? El valor científico de esta investigación radica concretamente en la alta incidencia social y jurídica que tiene la crisis carcelaria en la actualidad nacional debido a las continuas violaciones de derechos Humanos al interior de los lugares de reclusión, la problemática de la inseguridad por los altos índices de reincidencia y al mismo tiempo a la espiral degradante de los valores y de la desconfianza en las autoridades. Así por ejemplo, la adopción de medidas penales inadecuadas podría simplemente estar conllevando a la promoción indirecta de la criminalidad en medio de la sociedad, debido a que la oferta de centros carcelarios es insuficiente, y al hecho de que cada vez más personas, en virtud de esta crisis, obtienen beneficios que muchas veces se perciben como contrarios a la expectativa o demanda de justicia. De acuerdo con lo dicho, si la Pena en el marco de la justicia retributiva adolecía de no cumplir el cometido de la reinserción social, la justicia restaurativa en conjunto ha dado visos de no superar el fracaso Penal en la consecución de dicho propósito debido en buena medida a la falta de integralidad.

Por consiguiente, estudiar la naturaleza de este precepto-principio de suspensión condicional de la ejecución de la Pena adquiere suma importancia tanto profesional como pedagógica, dado que definitivamente el país necesita un tratamiento integralmente diversificado en pro de una armonía y confianza en las instituciones y los administradores de justicia. Se requiere no sólo evacuar las cárceles por medio de subrogados penales o delitos excarcelables o el pago de cauciones prendarias o indemnizaciones, sino reducir al mismo tiempo el incremento de la población por concepto de reincidencia. recalcando las implicaciones sociales que tiene la aplicación del mismo y sobre todo determinado si

su impacto social ante la problemática anteriormente descrita si tiene efectos positivos sobre la misma.

No se puede seguir permitiendo que se ahonde la distancia que ya se ha producido entre las instituciones del Estado y la opinión del pública sólo por el desconocimiento y la falta de socialización, y quizás, de alguna manera directamente relacionada, una participación ciudadana efectiva. Se necesita dar a conocer de forma más oportuna y sencilla esa malla de contención que invisiblemente rodea y regula los comportamientos y correlaciones para que existan expectativas claras acerca del Estado y sus responsabilidades.

Por otra parte resulta muy provechoso fortalecer la difusión del derecho interno en aras de la cohesión sociedad-Estado en el espíritu de la Constitución Política, la cual ordena expresamente que “en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución” (art. 41 C.N.). Pero la demanda por conocimiento de la Ley en el presente amerita que se aplique con plena certeza para que ésta adquiera fuerzas para cumplir su contenido preventivo en la sociedad ex ante y no ex post.

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General:

Analizar las ampliaciones sociales de la aplicación de la suspensión condicional de la ejecución de las penas, por un lado establecer las condiciones por las culés se necesita aplicar, y por otro determinar si el impacto social de esta apelación si tiene efectos positivos ante la problemática reseñada

1.2.2 Objetivos específicos:

Estudiar la coherencia que tiene la naturaleza del nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio, sus fines filosóficos con el estado actual de la sociedad colombiana.

Exponer los insumos teóricos sobre la política criminal en materia de sistema penitenciario y carcelario en Colombia.

Sugerir el aprovechamiento y robustecimiento de los mecanismos de prevención y de reinserción social que podrían reducir la tasa de privación de la libertad, la reincidencia y la violencia.

Establecer desde la academia, una mitigación de la percepción negativa que naturalmente, en virtud de la costumbre, puede generar una liberalización de la Pena, la discrecionalidad y la falta de programas de reinserción social.

1.3 DISEÑO METODOLÓGICO.

1.3.1 Tipo de estudio:

La presente investigación es de tipo descriptivo, con un componente explicativo y analítico sobre las implicaciones de la modificación de la normatividad que regula delitos o injustos considerados de pequeña afectación, y la relación que guarda no sólo con la futura conducta y desempeño social de los individuos, sino con la problemática de hacinamiento en las cárceles colombianas, foco de alarmantes indicadores en materia de garantía de los Derechos Humanos y fundamentales. La población referente en la presente investigación está enmarcada en dos ejes de consulta: Por una parte, los civiles, nacionales colombianos que han cometido algún injusto, y cuya pena sea susceptible de gozar del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de misma (los cuales se verían afectados positiva o negativamente por la modificación de los años a los cuales se aplica el beneficio de suspensión de la ejecución de la Pena contemplada en el art. 63 del Código Penal, Ley 599 de 2000 numeral primero); y, por otra parte, se tiene como población en estudio, a las autoridades penales relacionadas directamente con el tránsito y el quehacer penitenciario. La fuente de información es eminentemente documental, porque se trata de un análisis de los textos que componen el ordenamiento jurídico colombiano tales como el contenido del capítulo III del Código Penal colombiano. Se tuvieron en cuenta algunos estudios que apenas recientemente se han hecho sobre esta materia. Como es predecible, se utilizó los motores de búsqueda como el internet para la obtención de material jurisprudencia y legal de sitios oficiales de la rama judicial y de centros especializados reconocidos. Se procedió a analizar la naturaleza y objetivos del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena dentro de los procedimientos garantistas conexos con el marco de la justicia restaurativa.

2. ACERCAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN COLOMBIA

Como se logre exponer en la introducción en la actualidad se está presentando un grave problema en las cárceles colombianas que tiene como se resaltara en toda la investigación como mayor paradigma el hacinamiento, del cual se producen innumerables efectos negativos para toda la sociedad, ante esto se ha querido reformar la política criminal en el país como mediad de mitigación entablado variedad de presupuestos para dicha finalidad, dentro de los cuales se estableció el acceso de forma más fácil a medidas sustitutivas de la ejecución de la pena como es el caso de la suspensión de la ejecución de la pena, antes de establecer su pertinencia como efecto contendidor a los problemas en mención, es necesario establecer las condiciones sociales que dieron lugar a este replanteamiento, el cual se presentara al lector en a lo largo de este capítulo.

2.1. Noción de hacinamiento

Según el diccionario de la real academia de la lengua española el hacinamiento hace referencia a las acciones de Amontonar, acumular, o juntar sin orden, en materia carcelaria, la doctrina ha definido este problema como:

La consideración del déficit interviene, además del factor demográfico (crecimiento vegetativo de la población y migraciones), los componentes físicos de la vivienda y de su entorno y también ciertos componentes sociales. Dentro de los componentes físicos se incluyen el diseño de la vivienda, la habitabilidad de la construcción, la situación sanitaria, las condiciones del lugar de emplazamiento y los medios físicos de integración social (caminos, equipamiento educativo, sanitario, etc). Los componentes sociales comprenden la densidad habitacional, es decir la relación entre e9 número de habitantes y el espacio disponible (la densidad se convierte en hacinamiento cuando sobrepasa ciertos límites tolerables) y el régimen de tenencia de la vivienda (propietario, inquilino, ocupante de hecho, vivienda cedida en calidad de préstamo, etc) (Puga, 1983).

2.2. Estadística sobre el hacinamiento

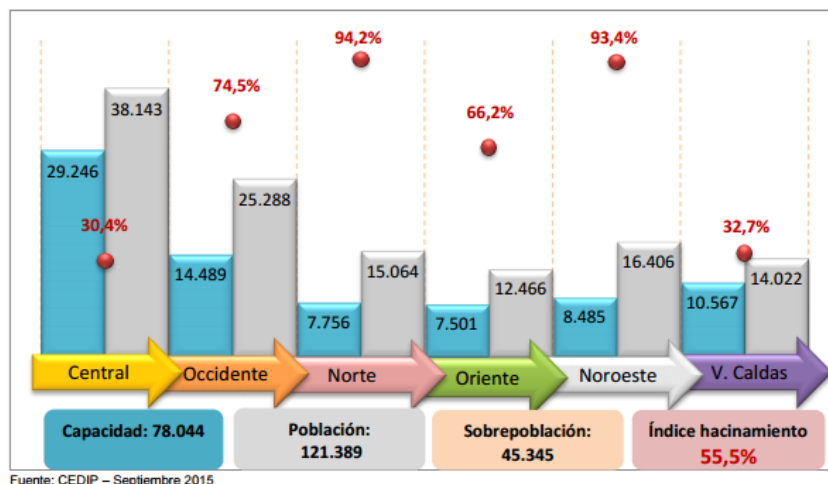
En Colombia como lo han denunciado los medios de comunicación de manera reiterada se presenta un grave problema en el sistema penitenciario y carcelario del país, en el cual se presentan un sin número de violaciones a los derechos humanos, resaltando entre ellos la problemática del hacinamiento que no solo se funda en simples denuncias periodística, sino que es denunciado también por informes de la defensoría del pueblo, de la academia, e incluso de el mismo INPEC, de los cuales de manera general evidencia

que para el cuarto trimestre del presente año hay alrededor de un 50% de población carcelaria superior a la capacidad que el mismo sistema tiene para tratar, es tan abrumador los informes que la misma institución encargada de la atención a esta población, manifiesta que:

La población carcelaria y penitenciaria a cargo del INPEC (121.389), supera la capacidad de los ERON (78.044) debido al constante crecimiento en el número de reclusos(as). Al terminar el mes en estudio, los establecimientos presentaron una sobrepoblación de 43.345 personas, que se traduce en un índice de hacinamiento de 55,5%, es decir, 0.6 puntos porcentuales por encima del mes anterior. (INPEC, 2015, N°9)

Para comprender de manera más fácil y grafica las dimensiones de la problemática denunciada, es necesario analizar el índice de sobrepoblación según las regiones por las cuales se encuentra dividido el sistema penitenciario y carcelario(en adelante SPC), las cuales son: Norte, Oriente, Occidente, Central, Noroeste, y Viejo Caldas, en las cuales para finales del tercer trimestre del presente año según el mismo INPEC tienen un porcentaje de sobre cupo del 94,2%; 66,2%; 74,5%; 30,4%; 93,4%, y 32,7% respectivamente se logra ver en el garifo N° 1.

Grafico 1 hacinamiento

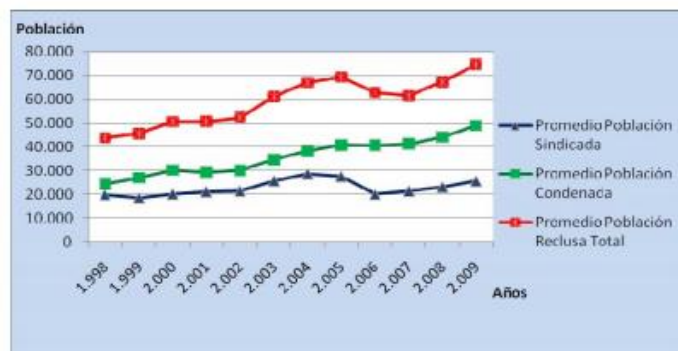


Resulta de gran preocupación que sea el mismo Estado quien debe salvaguardar y garantizar las mínimas garantías a este tipo de población quien exponga de primera mano la estadística que presentan como el sobre cupo en la población carcelaria está llegando a cifras totalmente alarmantes, cifras que han tenido un constante crecimiento desde inicios de la segunda década del siglo XIX.

Abonado a estos informes es importante para esta investigación integrar los informes presentados por las entidades autónomas e independientes a la administración

como la defensoría del pueblo e incluso las universidades, con lo cual se obtendrá información más transparente y sobre todo permitirá tener un mayor acercamiento a la realidad que se presenta en las cárceles colombianas, así se evidencia por parte de la universidad del rosario que: en la cárcel La Modelo de Bogotá los únicos espacios que quedan libres para dormir son los techos de los pasillos. Por eso, los reclusos se disputan hasta los cielorrasos (Rueda, 2015), este hacinamiento se debe a la poca infraestructura con la que cuenta el SPC, además del aumento en el ingreso de personas a el SPC, en este último aspecto es necesario presentar el siguiente grafico en el que se muestra el crecimiento poblacional en las cárceles de este país:

Grafico 2 crecimiento poblacional



Fuente: informe empírico junio del 2010 de la universidad de los andes

Al analizar el grafico anterior se evidencio como hay un aumento progresivo en el número de población carcelaria, dentro de la cual encontramos a personas que cumplen o bien sea medias de aseguramiento o ya la pena propiamente dicha, índices que acrecentaron gracias a reformas normativas en materia penal, donde se extendían las penas, y cada vez sea hacia más difícil lograr las negociaciones propias del sistema penal Acusatorio del país, pues en muchos de los casos se imposibilitaba a los indiciados logara acuerdos, preacuerdos, o incluso obtener el principio de oportunidad, como es el caso de los autores de conductas delictivas contra menores que desde el 2006 no tienen ningún tipo de beneficio. De esta manera como se tratara más adelante dentro de la política criminal en Colombia para tratar la problemática carcelaria hay una total desajuste entre la teleología de la parte sustancial y procesal en materia penal, junto con el SPC. Por esto el aumento poblacional junto con la discordancia existente dentro del ordenamiento jurídico penal se han consolidado como los factores determinantes en la problemática objeto del presente estudio, con la información expuesta hasta el momento se presenta a los lectores el aspecto cuantitativo de la presente investigación, queriendo ante todo

demostrar que la problemática de hacimiento es un dilema que necesita del estudio por parte de la academia.

Sobre este aumento cabe acotar una exposición sobre las penas que son impuestas a las personas y por las cuales hay un aumento progresivo en la población interna del país, a continuación se presenta una relación de delitos con las penas impuestas y que constituyen el mayor porcentaje de entradas a los centros penitenciarios:

Tabla 1 Tipos Penales y sanciones correspondientes

Artículo	Tipo penal	Descripción típica y modalidades	Pena
375	Conservación o financiación de plantaciones	El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas.	Prisión: 96 a 216 meses Multa: 266,66 a 2.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) ³
		Si la cantidad de plantas excediere de veinte (20) sin sobrepasar la cantidad de cien (100).	Prisión: 64 a 108 meses Multa: 13,33 a 75 SMLMV
376	Fabricación, tráfico o porte de estupefacientes	El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia.	Prisión: 128 a 360 meses Multa: 1.333,33 a cincuenta mil SMLMV
		Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética.	Prisión: 64 a 108 meses Multa: 2.66 a 150 SMLMV
		Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética.	Prisión: 96 a 144 Meses Multa: 133,33 a 1.500 SMLMV
377	Destinación ilícita de muebles o inmuebles	El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal destinación.	Prisión: 96 a 216 meses Multa: 1.333,33 a cincuenta mil SMLMV
378	Estímulo al uso ilícito	El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia.	Prisión: 48 a 144 meses. Multa: 133,33 a 1.500 SMLMV
383	Porte de sustancias	El que en lugar público o abierto al público y sin justificación porte escopolamina o cualquier otra sustancia semejante que sirva para colocar en estado de indefensión a las personas.	Prisión: 16 a 36 meses, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor

Fuente: Uprimny & Guzmán (2010, p. 42).

En los párrafos anteriores se trató el tema del hacinamiento, ahora bien, es indispensable exponer cada uno de los efectos negativos de dicho problema, resaltando

en primer lugar que por amplia normatividad internacional⁷ las personas que por mandato legislativo están privadas de la libertad se les debe garantizar ciertos derechos; como lo son la dignidad humana, la vida, la seguridad personal entre otros, específicamente se solicita que todas las personas privadas de la libertad deber ser tratadas con dignidad y con el respeto inherente a todo ser humano (Costa, 2012, p. 14), a lo cual se acota lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T 857 del 2013 en la que se declara por ese tribunal que aunque una persona sea integrada al SPC, y se le sean limitados algunos derechos, otros de grane envergadura deben ser protegidos y garantizados⁸, por ende con el hacinamiento se está vulnerando en primer lugar los derechos de la población reclusa y los deberes inherentes del Estado por los instrumentos jurídicos que se plantearon con anterioridad, con lo cual

El hacinamiento, en opinión de varios autores, es el indicador más grave del déficit por la amplia gama de consecuencias negativas que ocasiona. Dos factores vinculados con la disposición física de la vivienda se encuentran alterados en situaciones de hacinamiento: la privacidad y la libre circulación. ... Ambos contribuyen a una vida mental emocionalmente sana (Lentini & Parelo, 1997, p. 3)

2.3. Tratamiento jurisprudencial y teórico del hacinamiento en Colombia

Como se expuso en el acapice anterior la problemática que actualmente se vive en el SPC de Colombia se encuentra en unos niveles exorbitantes produciendo innumerables violaciones a la población interna y donde el hacinamiento se consolida como su mayor paradigma, por lo cual desde 1998 se ha tratado como estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional; por ser un inconveniente sistemático donde cada uno

⁷ Desde la misma carta de sanfrancisco, pasando por la declaración universal de los derechos humanos, a nivel internacional, como la misma convención americana sobre derechos humanos, son innumerables los tratados internacionales y regionales que de manera expresa o tácita protegen o establecen ciertos derechos a las personas privadas de la libertad

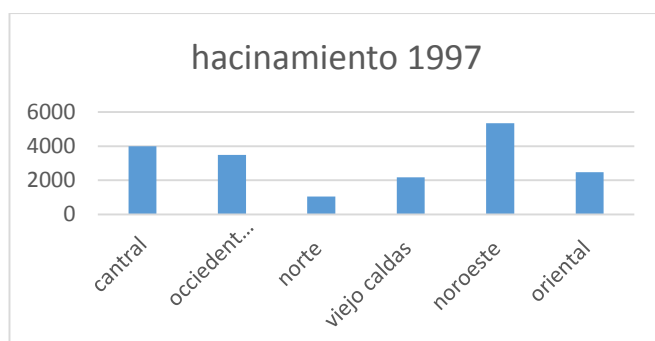
⁸ En este sentido esa alta corte ha establecido una clasificación de los derechos de los internos dividida en la siguiente clasificación de“(i) aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los derechos políticos como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de éstos: los derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es importante tener en cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”

de las entidades que lo integran con sus conductas ayudan a fomentar dicha dificultad, de esta manera no es solo por culpa del INPEC o la administración que el hacinamiento este en los niveles que está en la actualidad. En esto interviene también la Fiscalía, los jueces de ejecución de penas, los jueces de conocimiento y en general la administración de justicia, contando a los auxiliares y los defensores quienes también aportan desfavorablemente a la consolidación de las violaciones a la población interna que se presentan en este tiempo, además de todo ello la política criminal colombiana es uno de los factores con mayor determinación en esta sintomatología.

Para poder lograr comprender el aspecto sociológico y jurídico del actual estado en el que se encuentra el SPC es necesario analizar por qué se llegó a determinar el estado de cosa inconstitucional en 1998 y como por una aparente solución se manifestó que ya no se debía tratar como tal la problemática el SPC, pero que se retomaría en el año del 2013, donde por las innumerables acciones de tutela en los dientes centro carcelarios del país se hace necesario volver a declarar el estado de cosas inconstitucional en dicha materia.

Para el estudio en mención se comenzara con un análisis a la sentencia T 153 de 1998 donde se estudia por parte de la Corte dos acciones de tutela presentadas por internos de las cárceles Nacional de bellavista en Medellín y la cárcel nacional modelo de Bogotá, y que genera por primer vez que dicho inconveniente sea declarado como estado de cosas inconstitucional. En esta se realiza un estudio o inspección a dichas cárceles, con lo cual se destapa la grave problemática social que existe en el país, evidenciando un hacinamiento del 13.27% superior al cupo del que cuenta el SPC para esa época, donde cabe resaltar que dentro de las regiones en que está dividido el SPC, en esa época los niveles eran muy altos como lo muestra el siguiente gráfico:

Grafico 3 hacinamiento 1997



Fuente: propia con base a la información de la sentencia 153 de 1998

La corte adicionalmente establece un estudio histórico en el cual encuentra un número de etapas en las cuales se va gestando los efectos que para 1998 se sentían duramente, y que por falta de debida gestión se siguen sintiendo en nuestra época: las cuales son la época del asentamiento⁹, entre 1938 y 1956; la época del desborde¹⁰, entre 1957 y 1975; la época del reposo¹¹, entre 1976 y 1994; y la época de la alarma, entre las cuales se destaca la última donde a pesar de políticas en las cuales se buscaba disminuir la población, esta aumenta exponencialmente.

Para que esa situación se de la Corte expresa que son varias las causas de la misma, dentro de las cuales se encuentra un aumento en la rigidez de las normas penales, en las cuales se aumentaban las penas y se buscaba logara que se cumpliera efectivamente el encarcelamiento, asimismo aumento la población detenida preventivamente, estos dos factores junto con la falencia en la infraestructura, aspectos que se unieron para que en 1998 explotara este dilema. Trayendo con esto graves consecuencias como la imposibilidad para cumplir la finalidad de la pena, pues nos e permite brindar a los internos los medios que permitan la resocialización, igualmente no se pude garantizar una vida digna a esta población en las condiciones en las que se encuentra, además de vulnerar muchos delos derechos que tiene como internos. Después de esta sentencia con informes presentados posteriormente se determinó que para el año 2000 se mantenía, pero por lo dicho por la defensoría del pueblo se entendió por superado el problema para el año 2002. Pero por un elevado número de acciones de tutela presentada por internos en la segunda

⁹ para la corte esta etapa La época de asentamiento, entre 1938 y 1956, tendría como antecedentes la expedición del código penitenciario de 1934 - que crea la División de Prisiones dentro del Ministerio de Gobierno -, y la construcción de algunas cárceles como las de Cúcuta y Palmira y el inicio de otros reclusorios distritales como el de Sincelejo. La etapa se inicia, en 1938, con una población carcelaria de 8.686 internos. Hasta 1945, este número aumentó anualmente en una cifra promedio de mil internos. En 1946, se presenta una baja importante en el total de los reclusos (2.765 internos menos), a causa de un proceso de desjudicialización, pero este descenso fue rápidamente compensado por los incrementos de los próximos años, hasta llegar en el año de 1957 a la cifra de 37.770 internos.

¹⁰ La época del desborde, entre 1957 y 1975, se inicia con un nuevo proceso de desjudicialización, en 1957, que reduce en 12.771 internos la población carcelaria. En esta etapa se da comienzo a una serie de obras carcelarias (en lo que el estudio denomina el boom de la construcción) y se expide el nuevo estatuto carcelario, mediante el Decreto 1817 de 1964.

¹¹ Entre 1976 y 1994 tendría lugar la llamada época del reposo. No existen datos acerca del número de reclusos en los años 1972, 1974, 1975 y 1976. Pero en 1977 se realiza el primer Censo Nacional Penitenciario, cuyo resultado arrojó un número total de 34184 internos. Esta cifra disminuiría aún más, de manera tal que entre 1980 y 1994 la población carcelaria se mantuvo, con pocas excepciones, por debajo de los 30.000 reclusos. El estudio resalta que entre 1981 y 1985 el promedio de internos fue de 27.700, y que en 1986 disminuyó hasta 24.893, a causa del Decreto 1853 de 1985, que ordenó la excarcelación de sindicados por delitos menores. Sin embargo, el número de internos volvería a ascender a raíz de las modificaciones en la legislación y de la aplicación del Estatuto para la Defensa de la Democracia y de las normas excepcionales posteriores.

década del presente siglo, produjo que en la sentencia T 388 del 2013 se volviera a evaluar este problema ya que en las cárceles modelo de Bogotá, bellavista de Medellín, metropolitana de chucuta, en Valledupar, Popayán y Barrancabermeja se presentaron acciones d tutela por la misma problemática, sin embargo por los niveles en los que se encuentran en la actualidad el hacinamiento en SPC, para la Corte se necesita un estudio especial pues se está vulnerando en mayor medida la dignidad humana a los internos, y más teniendo en cuenta la especial situación de sujeción en la que se encuentra esa población en referencia al Estado, donde este debe respetar los derechos ya garantizados a ellos, pues con la detención privativa de la libertad, no se deja de ser personas, si se limitan unos, se niegan otros, pero permanecen muchos otros derechos que deben ser garantizados, específicamente encontramos lo siguientes derechos como derechos propiamente dichos para esos internos, los cuales son:

- (i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y dignos,
- (ii) el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana,
- (iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido personal,
- (iv) el derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de cama correspondiente en condiciones higiénicas,
- (v) el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable, suficiente y adecuada.
- (vi) la adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión,
- (vii) la provisión de los implementos necesarios para el debido aseo personal de los presos,
- (viii) el derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un ejercicio diariamente al aire libre,
- (ix) el derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso al establecimiento y cuando así se requiera,
- (x) el derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y diligente,
- (xi) la prohibición de las penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o degradantes,
- (xii) el derecho de los reclusos a acceder a material de lectura,
- (xiii) los derechos religiosos de los reclusos (Corte Constitucional, 2013, T 388)

Conjunto de derechos que por el déficit presente en el SPC colombiano se ven fuertemente vulnerados por todo esto, ante este análisis y teniendo en cuenta toda la información presentada se declaró nuevamente el Estado de cosas inconstitucional.

En conclusión estamos ante un problema que necesita un tratamiento específico, eficaz haya sobre todo inmediata, para solucionar los efectos negativos del mismo donde se vulneran multiplicidad de derechos a la población interna del SPC, y genrando un

malestar social en todo el país pues aunque dicha población haya cometido ciertos delitos no por ello puede su calidad de persona, se le es limitado y negado cierto número de derechos pero se le es salvaguardado muchos otros, ante esto se evidencio claramente tres factores determinantes como consecuencias de la actual situación carcelaria en Colombia, los cuales son: i) rigidez de las normas punitivas, ii) aumento de la población interna por mediadas de aseguramiento, y iii) déficit en la infraestructura penitenciaria de esta nación, causas que son y pueden ser tratadas por la política criminal del país, que ya empezó su reforma y la cual empezaremos a estudiar a continuación.

2.4. Política criminal y su incidencia en el colapso del sistema penitenciario y carcelario en el país

Con todo lo manifestado en hasta el momento se ha demostrado las graves implicaciones sociales que ha producido este colapso en el SPC colombiano, que de primera vista se pueda considerar como un tema aislado, pero que tiene grandes repercusiones en los cimientos de toda la sociedad. Por ello el reto que tiene el Estado colombiano es inmenso, a lo cual la forma de dar solución al mismo solo se puede realizar con la aplicación de políticas públicas adecuadas y eficaces, que en esta materia se realizarían de manera específica a través de la política criminal.

Esto se debe a que la política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática (Velázquez, 2009, p. 156), pues son los «productos» de la acción pública (Meny & Thohénig, 1992, p. 14), en otras palabras, comprende el uso de técnicas de análisis, investigación y propugnación en la definición de los problemas, la toma de decisiones, la evaluación y la implementación (Aguilar & Lima, 2009, p. 5).

Estas políticas públicas son las conductas genéricas que realiza el estado para el cumplimiento de sus fines, sin embargo para el objeto del presente escrito hay un tipo de política pública específica para la materia, la cual es la política criminal, no queriendo con ello desconocer que debe toda política criminal responder al tipo de política general como lo manifiesta el profesor Tocora (1997), donde la cuestión de cómo debe tratarse a las personas que atentan contra las reglas básicas de la convivencia social y con ello lesionan o ponen en peligro al individuo o a la comunidad constituye el objeto principal (Borja, 2003, p. 120) de esta política, de esta manera se busca determinar el por que hay

personas que realizan conductas anormales y desviadas, con la finalidad de lograr disminuir la comisión de dichas conductas. En este orden de ideas, en Colombia a partir de la década de los dos mil, en materia penal se dieron grandes transformaciones como la instalación de un derecho penal sustancial de tendencia europea donde se establecen penas cortas pero que se deben cumplir en su totalidad, posteriormente con la ley 906 del 2004 se adopta un sistema procesal de tendencia acusatoria, que tiene por finalidad la negociación, de por si es un contraste desde su sanción, sin embargo las cosas empeoran cuando se aumenta las penas, y se hace más complicado la aplicación de principios, beneficios y rebajas a través de reformas legislativas, con lo cual el desajuste como se ha reiterado entre el mismo sistema es realmente considerable, y solo ha traído como consecuencia el alto aumento en la población interna del país, razones por las cuales y después de las denuncia judiciales se replantea dicha política criminal para fomentar reformas que promuevan la aplicación de medidas sustitutivas de la pena, para lograr mitigar estas problemáticas, una de las cuales será expuesta a continuación, por ser el centro de esta investigación.

3. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

3.1. Antecedentes históricos.

Para entender un poco mejor la discusión planteada en la introducción, merece la pena abordar el concepto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, su evolución histórica y sus versiones desde otras latitudes y lógicas, y su aplicación como medida de solución para la problemática carcelaria y penitenciaria en Colombia. Así pues, lo primero que hay que decir, es que el asunto de la suspensión condicional de ejecución de la Pena, es desde la era pre-moderna (entendida ésta como anterior a la revolución industrial del siglo XVIII), una de esas costumbres social y jurídicamente aceptables a lo largo y ancho del planeta, al menos en cuanto a delitos considerados menores se refiere. De hecho figuras como la amnistía (olvido del delito) y el indulto (perdón de la pena), han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia de los conflictos y las querellas. Estas mismas figuras inspiraron medidas más recientes, según las cuales la pena (restricción y privación de la libertad personal y de movilidad) debe ser impuesta y ejecutada sólo si es necesaria para cumplir los fines de prevención general o especial (Lacassagne, & Martin, 1901)

Tal y como señaló Hurtado (1997), en Derecho comparado existen instituciones similares a la suspensión de la pena. Así por ejemplo el modelo español se corresponde

con el europeo continental de la *Sursis*. Este sistema, de origen franco-belga, presupone la declaración de culpabilidad del delincuente y la imposición de una pena, cuya ejecución sin embargo se suspende y se fija un plazo de prueba. Transcurrido dicho plazo, si el culpable no recae en ninguna actividad delictiva, se entiende que la condena ha sido cumplida y se da por remitida la ejecución (Dufour, Brassard, & Guay, 2009).

Continuando con Hurtado (1997), en Derecho angloamericano, la declaración de culpabilidad se hace en un momento distinto del pronunciamiento de la condena en la que se fija la pena. Para la *probation*, si el culpable se somete a una serie de condiciones que ha de cumplir bajo el control y vigilancia de un funcionario especializado y supera con éxito el período de prueba, el juez no dictará condena. Si dentro del plazo de prueba se quebrantan las condiciones impuestas, se revoca el beneficio concedido.

Se logra apreciar entonces que el origen tanto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena como de la reserva de fallo es la probation anglosajona. Casi simultáneamente, a mediados del siglo XIX, se desarrolló en Estados Unidos (al comienzo por iniciativa privada) y en Inglaterra (mediante la práctica judicial), la renuncia a la condena del procesado, luego de declararlo culpable, acompañada de su sometimiento a un control durante un plazo de prueba. En los países de Europa continental, la probation no fue recepcionada como tal, y sólo en las últimas décadas se ha acentuado su introducción de manera diversa por parte de legisladores preocupados en adecuarla a sus realidades y necesidades particulares.

De manera que se tienen dos sistemas básicos referentes a la suspensión de la ejecución de la pena, al menos desde una óptica doctrinal-procedimental: El sistema angloamericano y el sistema europeo. Como bien lo han expresado el profesor Ripas (2002), en el Sistema angloamericano se declara la culpabilidad pero se suspende el pronunciamiento de la sentencia, incluso la propia condena, que podría no pronunciarse, aunque el que ha sido declarado culpable se somete a vigilancia por parte de un funcionario facultado para tal ejercicio.

El Sistema europeo, por su parte, establece la culpabilidad del sujeto y además, la sentencia condenatoria se dicta (fijación de la pena), pero se suspende el cumplimiento de esta, y si durante determinado tiempo el reo no comete otro delito, la condena se considerara como no pronunciada, es decir, sin efecto alguno ya que cumplió lo que se le asignó al sujeto. La similitud existente entre las Leyes de Bérenger aparecidas en Francia

entre 14 de agosto de 1885 y el 26 de marzo de 1891, y el actual código penal colombiano dada la definición y los procedimientos descritos en el mismo, ofrece el gran indicio de que el Legislador fue profundamente influenciado por estas estructuras legales.

Jaén (2003), sostiene que el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la Pena, tiene su fundamento en la prevención especial: evitar los efectos negativos de las penas cortas privativas de libertad. Estas últimas, como decía von Liszt (1905), «no intimidan, no mejoran y sólo corrompen», incluso siempre se han puesto esas penas como ejemplo de «prevención especial al revés» (resocialización negativa), porque los lugares de cumplimiento suelen ser más bien «escuelas de criminalidad» (Op. cit, 2003). Siguiendo a Bonfill (2014), la historia jurídica de los diferentes países muestra creaciones jurídicas pioneras que han ido definiendo la posibilidad de suspender la pena privativa de libertad por una medida penal alternativa. Los antecedentes históricos sitúan a la Escuela Positiva Italiana y a la Unión Internacional del Derecho Penal como promulgadores de la no prisión para aquellos infractores ocasionales por delitos leves, que entendían que el efecto intimidador de la pena tenía que ser suficientemente eficaz. Es el caso, por ejemplo, de la *Verwarnung mit Strafvorbehtalt* (amonestación con reserva de pena) alemana, similar a la “suspensión de fallo” española y que reconoce la culpabilidad del sujeto pero se suspende la pena de prisión a condición de no delinquir en un plazo de hasta tres años; en Alemania esta modalidad está destinada a los delitos cometidos por menores y, ocasionalmente, por adultos. Las más importantes y más parecidas a la concepción actual de suspensión de la pena son la *Probation* anglosajona y el *sursis* belgo-francés. A continuación, se profundiza en estas dos corrientes, ya que se desarrollaron de maneras diferentes atendiendo a las particularidades legales de los países que las constituyeron.

Como ya se había señalado, la *Probation* fue instituida en los EE.UU. en 1878 y en Inglaterra en 1887. Esta surgió como resultado de un largo proceso evolutivo que se inició en las colonias americanas a principios del siglo XIX para evitar los efectos negativos de la prisión, mediante un concepto de prueba y vigilancia, supervisado por los *State agent* en EE.UU. y por los *police court missionnary* en Inglaterra (FERNÁNDEZ Carrasquilla, Juan, 1982). En esta modalidad se reconoce la responsabilidad penal del sujeto pero no se dicta sentencia, pasando a un periodo de prueba donde la persona estará sometida a una serie de reglas de conducta de cariz educativo y/o resocializador, supervisadas por un *Probation officer*. El cumplimiento de estas reglas determinará que

se dicte o no la sentencia condenatoria de prisión. De esta manera, si la persona cumple con todas las condiciones impuestas no le constará ningún antecedente penal dado que nunca se habrá dictado sentencia.

El agente de *Probation* tendrá que trabajar para favorecer el establecimiento de nuevos vínculos sociales, como ayudar a la consecución de un trabajo, conseguir una vivienda estable o mejorar las relaciones familiares (Farrall, 2002). Por lo tanto, el agente de *Probation* no gestionará simplemente un proceso de rehabilitación, sino que tendrá que establecer una relación individualizada, con el objetivo de estimular “la motivación al cambio y de atender a las circunstancias personales” (Ward & Maruna, 2007, p. 103-104).

Al contrario que el modelo anglosajón, en el belgo-francés el juez dicta sentencia de culpabilidad y determina la pena privativa de libertad. A pesar de ello, a continuación esta se suspende con la condición de no delinquir en un periodo de tiempo determinado (Dufour., 2009). Por ello, el *sursis* no contempla, además de la condición de no delinquir, el sometimiento por parte del penado a determinadas reglas de conducta. Por lo tanto, el individuo no se verá sometido a la vigilancia de ningún delegado de control. Además, el sujeto tendrá antecedentes penales una vez finalice el plazo de suspensión. Este hecho, junto con la carencia de asistencia o tratamiento, pueden ser decisivos en una posterior reincidencia.

La tendencia legislativa actual en Europa, se inclina por un modelo híbrido en el que el juez dictará sentencia condenatoria, pero esta se verá suspendida por un periodo de tiempo establecido, con determinadas condiciones o reglas de conducta para el individuo, que serán supervisadas por un agente de control o técnico especializado. De esta manera, el juez determinará las condiciones necesarias para la resocialización del penado con un tratamiento más individualizado y probablemente, considerado como más efectivo.

En Colombia, no obstante, a pesar de que se ha pretendido seguir esta última tendencia, no se ha acogido de manera absoluta y se carece de sistemas de resocialización superiores a la vigilancia del individuo con la motivación de privarle de la libertad en caso de fallar a sus compromisos, de modo que en definitiva se comprueba -vía similitud- que se parece más a la *sursis* franco-belga que a un sistema híbrido europeo *stricto sensu* o la probation anglosajona, toda vez que bajo esta tendencia, según Cid (2009), el régimen de incumplimiento no tiene paralelismo con la suspensión, de forma que, la comisión de

un nuevo delito durante el periodo de seguimiento no tiene que comportar necesariamente la revocación de la pena, sino que se pueden imponer sanciones específicas, o revocar la sanción e imponer una nueva pena por el delito cometido anteriormente. En relación a este aspecto, Mair G. (1994) apunta que esta sanción ha entrado en una fase de punición administrativa en la que el cumplimiento tradicional de las penas en prisión ha sido reemplazado por el cumplimiento en comunidad.

3.2. La suspensión condicional de la ejecución de la Pena en Colombia: Evolución legal y jurisprudencial.

En la doctrina jurídica, se discute mucho sobre cómo clasificar a la suspensión de la ejecución de la pena. Las opiniones divergen en la medida en que se le considera una especial clase de pena; un modo de ejecutar determinadas penas privativas de libertad; una medida de corrección; un medio de reacción penal independiente de las penas y de las medidas de seguridad; un procedimiento para individualizar la pena; o, finalmente, como un sucedáneo de las penas privativas de libertad. Tal como sostiene Hurtado (1997),

La deficiencia de estos criterios radica en su carácter unilateral. La complejidad de la condena condicional se debe a que cumple múltiples funciones tanto de índole preventiva como punitiva. Esta realidad es implícitamente considerada en las propuestas mencionadas. Sus autores no hacen sino poner en primer lugar uno de los aspectos. Para superar estas dificultades, se ha sostenido, por ejemplo, que ésta es, materialmente, una medida correctiva que implica la cooperación del autor, y, formalmente, una particular pena privativa de libertad (aunque no ejecutable condicionalmente). Y que la condena condicional, de acuerdo a las disposiciones legales, no es una pena ni una medida de seguridad, sino tan sólo una modalidad de ejecución de la pena, pero que si se tiene en cuenta sus fines, debe ser concebida como un medio para resocializar al condenado.

En términos complementarios, su carácter punitivo está dado por la declaración de culpabilidad, la fijación de la pena y la imposición de reglas de conducta. No se trata de una pena propiamente dicha porque ésta, precisamente, no es impuesta en la sentencia (Lackner, 1991). En ese sentido, en Colombia, el art. 63 C.P., dice expresamente que debe declararse culpable al procesado por medio de sentencia de primera, segunda o única instancia. Lo que ocurre es que ésta cuenta con una cierta distancia por recorrer hasta su ejecutoria. Hasta ese momento entonces, la pena impuesta no es siquiera una medida de seguridad, sino un medio de reacción penal *sui generis*, muy parecido a la suspensión de la ejecución de la pena. Esto, de caras al tema en tratado, significa que finalmente quien accede al beneficio, podría estar quedando fuera de los requisitos formales emanados de la Ley para acceder a un plan integral de resocialización, dado que no es ni libre ni privado

de la libertad; técnicamente se le impulsa a su auto-reinserción con base en sus propias capacidades y valores sin remitírsele a un programa complementario que garantice eso sí, su normalización o conformación a la Ley. Esta situación es la que mejor colorea la tesis acerca de las deficiencias patentes en el plan complementario que debe acompañar al Sistema Penal Oral Acusatorio en su fase garantista que proteja tanto a la ciudadanía como a quien se vio envuelto en una situación delictiva.

En particular, en la medida que la sentencia en su parte considerativa, contiene una desaprobación del acto realizado y la constatación de que el procesado es culpable y que además se le fijan reglas de conducta obligatorias, queda en últimas a merced de las consideraciones del juez en cuanto a la suspensión de su ejecución en virtud de lo dicho anteriormente en materia social, histórica y filosófica.

Ahora bien, ni la pena no ejecutoriada, ni la suspensión de la misma, deben ser consideradas como una gracia, una medida de indulgencia o de clemencia. La suspensión condicional de la ejecución de la Pena, constituye, ciertamente, una concesión muy importante en favor de la prevención especial en detrimento del principio que todo autor culpable de un delito debe ser castigado, pero tiene una dimensión punitiva que permite considerarla como una “sanción cuasi penal” (Jeschek, 1993).

Esto no constituye propiamente una medida de reinserción social, pero mediante la desaprobación del acto del autor y la imposición de obligaciones a éste, se busca influenciar su comportamiento futuro. El aspecto punitivo de estas medidas es reconocido por el legislador, en la medida en que las regula en sendos capítulos del Título III de la Parte general dedicado a las penas. La idea que la condena condicional representa un privilegio para el delincuente es, generalmente, admitida por quienes sostienen una concepción, sobre todo, favorable a la retribución (Hurtado, 1997).

Aunque no es nuevo, en la actualidad cobra fuerza el debate en el que se plantean nuevas fórmulas que superen la ejecución clásica de la pena privativa de libertad, sin necesidad de que ésta desaparezca del catálogo penal. Se promueven, por un lado, nuevas formas de cumplimiento más humanitarias toda vez que se tiene en cuenta el núcleo familiar y la disposición de la sociedad a negociar por la paz, y, por otro lado, se intenta potenciar los sustitutos penales. Se trata, en definitiva, de que la pena privativa de libertad sea la «*ultima ratio*» dentro del sistema penal. En la doctrina colombiana, se han

propuesto alternativas a la pena en sentido estricto, muy semejantes a las que se señalan en un interesante artículo publicado por la Universidad de Navarra (2010, p. 203), entre las que se destacan:

- i) Idear formas diversas de cumplimiento de la privación de libertad a través de medios innovadores del sistema institucional, en atención a los fines resocializadores de la pena y a la personalidad de los reclusos: por ejemplo, la prisión abierta, hospitales asistenciales psiquiátricos y establecimientos de terapia.
- ii) Tratamientos en libertad a través de regímenes de *probation*, *sursis*, o de puesta en libertad a prueba y con supervisión por las autoridades, y
- iii) alternativas superadoras de la pena de prisión clásica, que irían desde nuevas formas de penas privativas de libertad, como la localización permanente, hasta las auténticamente sustitutivas de la pena de prisión, como los trabajos en beneficio de la comunidad, los programas de *diversión* (sobre todo en justicia de juvenil).

Por consiguiente, ha de exponerse más adelante el análisis correspondiente al problema planteado al comienzo de este documento como ser la existencia o no –y en qué medida si se puede establecer- de un aporte tanto a la humanización de la pena como al mandato de protección a la población, lo cual incluye, protección contra delincuentes comunes como ser los mecanismos y vías de reinserción social, aun para quienes pudieran resultar beneficiados con el mecanismo de la suspensión condicional de la ejecución de la Pena.

3.2.1. Ley 599 de 2000

La normatividad penal colombiana que versa sobre la materia de que se ocupa esta investigación, remite al lector al código Penal o Ley 599 de 2000 en su artículo 63, el cual en su primera versión figuraba así:

La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años.
2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.

El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento.

En ello se puede observar que este mecanismo estaba circunscrito a una gama de delitos menores (o por lo menos considerados así de manera escasa) y parecía estar más sujeta a la discrecionalidad del juez debido a cierta vaguedad en su contenido, sobre todo a la hora de los requisitos para acceder al mismo, los cuales a su vez eran realmente escasos. La situación entonces era de fácil acceso y pocos beneficiarios; no se evidencia además ningún complemento relacionado con el seguimiento de las personas beneficiadas con este mecanismo. En ese orden de ideas, se aprecia como de vieja data, una política criminal de “línea dura” que apenas en apariencia, se suavizó, pero no tanto por antropocentrismo, sino por conveniencia económica y logística debido al alto costo que representan los internos para el fisco.

Por otra parte, la indefinición que caracterizaba a esta Ley, digamos, constituía una ventana abierta y ancha para la corrupción y otras irregularidades tales como la inducción al allanamiento o bien la imputación errada; incluso ahora, en el marco del nuevo Sistema Penal Oral Acusatorio, se ha hallado imputaciones erróneas o erradas con el fin de reducir la Pena o condena y darle trámite a otro tipo de negociaciones o salidas subrepticias como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales tratadas a veces como homicidio agravado. En los siguientes apartados, se presentan algunas reformas ulteriores, algunas polémicas, demandadas, otras realmente constructivas y que deja claro que la tarea aún no está terminada.

3.2.2. Ley 890 de 2004.

Tocante a la suspensión de la ejecución de la pena, en Colombia -que como se ha visto hasta el momento, comporta muchas características que la hacen un producto derivado de los desarrollos europeos en Derecho Penal-, de manera distintiva, el legislador, mediante la Ley 890 de 2004 introdujo un nuevo requisito para acceder al mecanismo legal: Artículo 4°. El artículo 63 del Código Penal tendrá un inciso penúltimo del siguiente tenor: "Su concesión estará supeditada al pago total de la multa". Este nuevo inciso resultó algo conflictivo debido a que la modificación o novedad introducida, representaba en cierto modo una dificultad para el acceso y dejaba por fuera a quienes no

podían pagar la multa impuesta de modo que transmitió una sensación discriminatoria o exclusivo-excluyente.

La Corte Suprema de Justicia, estableció que el aumento punitivo que consagró la Ley 890 de 2004 no se hacía aplicable a los procesos cursados en vigencia de la Ley 600 de 2000 y que se hacía aplicable únicamente en los distritos en los cuales entró a operar la Ley 906 de 2004 y en la misma gradualidad; es decir, al igual que la Ley 906 solo aplicaba en los distritos en los cuales progresivamente iba entrando en funcionamiento el sistema acusatorio.

¿Cuál es la razón de ser de esa sentencia? La respuesta se concentra en que el aumento punitivo de la Ley 890 de 2004 lo que buscaba era aumentar penas para dar margen de aplicación válida y efectiva a las instituciones de justicia premial establecidas en la Ley 906 de 2004 (Como la aceptación de cargos, por ejemplo); por ello, la Corte Suprema consideró que si era esa la intención de la Ley 890 se rompería el equilibrio en la aplicación de la Ley si se permitiera que sus efectos alcanzaran, incluso, a la Ley 600 de 2000.

En la sentencia C-194 de 2005 la Corte Constitucional se planteó los siguientes problemas jurídicos que resultan relevantes siendo oportuno citar:

a)¿Vulnera el principio constitucional de igualdad el hecho de que, para conceder el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el legislador exija al condenado el pago total de la multa? En el mismo sentido, ¿es constitucional que se exija el pago total de la multa al condenado que solicita el reconocimiento de la libertad condicional?

b)¿Constituye la exigencia del pago de la multa, como requisito para acceder al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, una manifestación de la prohibición constitucional del artículo 28 de imponer prisión por deudas?” (Corte Constitucional, 2004, C-194)

Como se puede observar, los cargos analizados en dicha oportunidad coinciden con los esgrimidos en la demanda de inconstitucionalidad, pues en esta ocasión el accionante solicita el retiro del ordenamiento jurídico de las normas demandadas exactamente por las mismas razones estudiadas en una ocasión anterior por la alta magistratura: i) la vulneración del inciso tercero del artículo 28 Superior que prohíbe la prisión y el arresto por deudas, bajo el entendido que la multa es una deuda que se tiene con el Estado y por ende la concesión de los subrogados penales no puede supeditarse al pago de dicha deuda, y ii) la vulneración del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la

Constitución, porque la norma prevé el mismo tratamiento para los que tienen y para los que no tienen la capacidad económica para pagar la multa impuesta.

Esta reforma por lo tanto no fue bien recibida y realmente pareció más bien un recurso elaborado para todos aquellos que en ese período de tiempo se hallaban en alguna situación penal y cuyo caudal económico les permitía librarse de los tribunales y los centros penitenciarios; fue sin más una reforma focalizada y encaminada a beneficiar a unos pocos pero que ponía en tela de juicio los derechos de una mayoría de escasos recursos. Ese tipo de situaciones son las que no se tienen en cuenta a la hora de gestionar y operacionalizar las leyes, perdiendo de vista los derechos constitucionales, y no obstante, terminan primero en aprobación que otras iniciativas más globales y relacionadas con la reinserción social.

3.2.3. Ley 1709 de 2014.

El artículo 29 de esta Ley, introduce modificaciones concernientes a requisitos para acceder al mecanismo legal en cuestión:

Modifícase el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 63. Suspensión de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.
2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.
3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política se exigirá su cumplimiento.

En ese mismo sentido se expresó la Corte Constitucional (2005) en Sentencia C-823, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, señaló que:

En el caso del subrogado penal de suspensión condicional de ejecución de la pena, respecto del cual la modificación introducida por el artículo 4° de la Ley 890 de 2004 al artículo 63 del Código Penal solamente estableció como requisito para su concesión el pago total de la multa que se haya impuesto, pero nada dijo en relación con la reparación a la víctima. Así, ha de entenderse entonces que en relación con dicho subrogado el numeral 3 del artículo 65 del Código Penal guarda entera vigencia y que la obligación de “reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que se está en imposibilidad económica de hacerlo” se mantiene como un requisito que surge como consecuencia de la concesión del subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena pero que no es presupuesto para poder otorgarlo.

Ahora bien, en el caso de que el condenado sufra una enfermedad muy grave y con padecimientos incurables, el Tribunal no estará sometido a requisito alguno, pero no podrá conceder la suspensión si en el momento de la comisión del delito el culpable ya tuviera otra pena suspendida por el mismo motivo. Así pues, con carácter general, el plazo de suspensión será el siguiente:

- De dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años.
- De tres meses a un año para las penas leves.

Dicho plazo se fijará motivadamente atendiendo a las circunstancias del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena; por consiguiente, este será de tres a cinco años en el caso de que la pena se suspenda en razón de haberse cometido el delito por la dependencia del culpable al alcohol o a sustancias estupefacientes o psicotrópicas. En el caso de este tipo de delincuentes, si durante el plazo previsto éstos no han conseguido la deshabituación, el Tribunal puede acordar la prórroga del plazo de suspensión por un tiempo máximo de dos años más. En cuanto a las condiciones de la suspensión, la ejecución de la pena quedará condicionada a que el reo no delinca durante el plazo fijado por el Tribunal.

En el supuesto de que se conceda la suspensión a adictos al alcohol o sustancias tóxicas o estupefaciente que hayan delinquido en razón de esa dependencia y se hallen sometidos a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que el culpable no abandone el tratamiento hasta su finalización. Los centros o servicios responsables deberán facilitar al Juez, en los plazos que señale, la

información precisa para conocer el comienzo y el fin del tratamiento, así como su evolución y la modificación que haya de experimentar.

3.3. Trasfondo, mensaje y efectos de la ley 1709 de 2014

Debido a que el art. 63 de la Ley 599 de 2000 ha recibido más de 2 modificaciones ulteriores en menos de 10 años, se está suscitando el fenómeno de *Lex tertia* o conjunción de leyes tocantes a una misma materia de las cuales se puede obtener la línea o extracto más favorable para casos específicos o complejos. Como ya se ha visto, la Ley 1709 de 2014 trajo novedades y especificaciones, pero como se verá a continuación es posible que vaya a complicar más el arte judicial, es decir, de administrar la justicia, y la situación carcelaria.

Así, en orden de ideas, tocante a la *Lex tertia*, la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento de octubre 6 de 2004 dentro de un Proceso con radicado Nro. 19.445; M.P: Álvaro Orlando Pérez Pinzón, se reiteró la siguiente postura:

Desde hace bastantes días, desde antes de la sentencia de 2ª instancia, se viene diciendo por la Corte Suprema de Justicia que el fenómeno conocido con el nombre de conjugación, conjunción o combinación de disposiciones, igualmente llamado *lex tertia*, tiene cabal cabida en nuestro medio. Por tanto, frente a la sucesión de leyes en el tiempo es perfectamente posible tomar de una norma lo favorable y desechar lo odioso, así como tomar de la otra u otras lo benigno y dejar de lado lo desfavorable.

Como además se dijo en providencia radicada bajo el número 29692 del 20 de enero de 2010 del mismo tribunal, en la cual se explicó que el “fenómeno conocido con el nombre de conjunción, conjugación o combinación de disposiciones” es admisible en el ordenamiento jurídico colombiano. La doctrina nacional acepta la combinación de leyes con el mismo criterio de aplicar la favorabilidad en tratándose de sucesión de leyes:

[...] bien puede suceder que una ley favorezca al sindicado por algunos aspectos y lo desfavorezca por otros; v. gr., en la nueva ley es más favorable el régimen de la pena principal aplicable, pero en la antigua es más benigno el de las sanciones accesorias. En estos casos, entendemos que el juez, al aplicar de cada ley la disposición más favorable, no está mezclando indebidamente las leyes, ni creando abusivamente una tercera, sino reduciendo cada precepto al ámbito que le corresponde” (Carrasquilla, 1982).

Por consiguiente es posible aplicar de manera fragmentada la ley por vía de favorabilidad teniendo en cuenta el momento y fecha de ocurrencia de los hechos; por ejemplo: En un proceso penal donde la ocurrencia de los hechos se dieron bajo la norma “original” (ley 599 de 2000, art 68A) por el delito de tráfico de estupefacientes (art 376 CP.), sin la modificación que hiciera art 32 de la ley 1709 de 2014, y la persona es condenada a treinta y ocho meses de prisión luego de la entrada en vigencia de la ley 1709 de 2014 del 20 de enero; se puede dar aplicación del art 63 del código penal en lo que se refiere a la suspensión de la ejecución de la pena, aplicando por favorabilidad solo el numeral primero de la misma disposición, modificado por el art 29 de la ley 1709 de 2014 conforme al aspecto objetivo, y no excluir de beneficios al condenado; ya que de tenerse en cuenta el contenido total del artículo 32 de la precitada ley 1709 de 2014 que modifico el 68A, sería más dañino o desfavorable, porque no existiría respecto de la conducta punible del ejemplo, derecho a ningún beneficio.

Como se puede colegir de las decisiones de la H. Corte Suprema de Justicia, antes citadas y sus fechas, el fenómeno de la conjunción o combinación de disposiciones no es una noción nueva, solo que ha sido inaplicada por nuestros jueces en detrimento de los derechos que ostentan los condenados; y es que casualmente los medios de comunicación no dudaron en publicarla como una “ley de descongestión carcelaria” con la que se mitigaría la crítica y crónica situación de hacinamiento carcelario en el país, y que dejaría en libertad a más de nueve mil personas, cuando la realidad es otra, ya que la nueva disposición legal, da lugar a un incremento en cuanto al tema de la población carcelaria; al negarse beneficios a los procesados por exclusión taxativa se aumenta el hacinamiento en los centros de reclusión.

En atención al fenómeno de *lex tertia* en caso de que se apliquen de forma fragmentaria (por vía de favorabilidad) ambas leyes (art. 63 viejo y nuevo), y en consecuencia se logre obtener beneficios para los procesados que infringieron la ley penal antes del 20 de enero de 2014 donde empezó a regir la ley 1709, se postulan algunos interrogantes que escapan a la presente investigación pero que se dejan como táticas pendientes: ¿Qué pasa con las personas que infringieron e infringen la ley penal con posterioridad a esta fecha y su conducta está enmarcada dentro de las que se consagran en el nuevo art 68A?, ¿Será una solución lógica para el tema de hacinamiento carcelario?, ¿Los delitos consagrados en la nueva ley no son pues los más comunes en la sociedad,

como para excluir a sus presuntos infractores de beneficios? ¿Dónde quedan los fines de la pena?

Desafortunadamente, el derecho penal se vuelve cada vez más acogedor de la teoría de la retribución “represión justa por delito cometido” (Roxin, 1997), y deja de un lado el fin resocializador que debe cumplir la pena dentro de un estado social y democrático de derecho, donde prima la dignidad humana.

Respecto a este punto vale la pena advertir que con el sistema judicial, ha ocurrido lo mismo que hasta hace pocos años ocurría con las fuerzas armadas de Colombia: Se hallaban sin integración, desconectadas, y cada una funcionaba por su lado. Es necesario por un lado visualizar al sistema judicial, como parte integral de un servicio social unido por ejemplo al sistema educativo, al sistema cultural o sociológico y aprovechar los espacios académicos de todos los niveles, incluyendo la temprana edad, para que se vinculen en el intento de una sociedad más participativa del contrato social que como nación hemos suscrito; por otra parte, es importante que este “sistema integral” sirva como focos de concientización de la importancia de observar el respeto debido al mismo.

3. LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA COMO SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL HACINAMIENTO.

3.1 El hacinamiento carcelario

Como se trató en anterioridad uno de los factores determinantes para la promulgación y facilidad de aplicar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dio como mediadas de la nueva política criminal del Estado que busca disminuir en gran medida el número que integra la población del SPC en Colombia. De modo pues que habría que entrar a considerar la profesionalización y capacitación de los funcionarios públicos tanto de las fuerzas armadas como de la rama judicial, lo cual podría ser una estrategia que genere un verdadero liderazgo del Estado y conduzca a la nación a entender y asimilar otras alternativas diferentes al encarcelamiento, o la violencia, la venganza o la justicia personal, y es ahí donde precisamente se desemboca en el tema principal de este trabajo: La suspensión condicional de la ejecución de la Pena.

El aumento del umbral de años (de 3 a 4 o 5 años), busca que muchos delitos “menores” entren al foco u objetivo de este beneficio y con ello se mitigar el caudaloso incremento del hacinamiento, y el contacto con el más allá de los límites de tolerancia del ser humano en su salud mental y física, pero de igual modo, no se está garantizando un proceso de acompañamiento para evitar precisamente una pérdida de esta alternativa o lo que es lo mismo, no se están adoptando medidas orientadas a garantizar la reinserción social de quienes han cometido un injusto.

De otro lado, logrando un aumento en el umbral, lógicamente se busca descongestionar muchos centros de detención, y cabría esperar que el dinero se invirtiese más en educación y reinserción social, socialización de contenidos éticos y culturales y en la inversión pública para superar la pobreza. Al incrementar el rango de acción de este beneficio se podría decir que lanzaría a un número importante de delincuentes de “primera vez” o de “leve mancha” pero en ningún momento implica poner en riesgo a la sociedad, y es ahí donde entraría a funcionar la creación de una política adicional y complementaria a la criminal o de drogas, se trataría sin más, de una política cultural y educacional.

En ese sentido, como bien señala Jaén (2003),

Dejando de lado el caso de los delincuentes de conciencia o por convicción, o más bien, en muchos casos «sin conciencia», como indudablemente ocurre con los terroristas, frente a los que, en verdad, toda pena puede resultar insuficiente, y todo esfuerzo de reeducación francamente inútil, resulta palmariamente insatisfactorio el sistema actual vigente aún en muchos países de agravamiento automático de la pena cuando concurren los presupuestos formales de la reincidencia, pues ello supone olvidar un aspecto esencial del problema: que mientras que el delito se basa en la culpabilidad por el hecho -al menos según el sentir mayoritario de la doctrina actual-, la reincidencia, en cambio, está relacionada, no con el hecho, sino con la personalidad del autor, que no debería determinar por sí un aumento de la pena, salvo que establezcamos un derecho penal de autor, hoy ampliamente rechazado, sino servir de base para otro tipo de consecuencias que permitan tratar esa tendencia que tiene el autor al delito y la personalidad peligrosa manifestada a través de su reiteración delictiva.

No se puede ni se debe seguir calculando, estimando o diseñando penas o restricciones con base en datos estadísticos que podrían estar más bien engrosados por el factor reincidencia, ni se puede catalogar peligro real para la sociedad cualquier primera

aparición de una conducta delictiva, dado que se ha visto que muchas actividades catalogadas como penalizables con cárcel, en realidad no ven traducida su naturaleza al menos de manera directa al entorno social, asunto que se puede apreciar en el cuadro No. 1 arriba presentado.

3.2 La reinserción social

Vistos los contenidos referenciales, históricos, documentales, científicos, y jurídicos, al consultar las fuentes se aprecia una interesante polémica que deja en una pobre calificación la gestión de las autoridades competentes en cuanto al tema de la reinserción social. A continuación se presenta el análisis y discusión de resultados de las fuentes consultadas para enmarcar y resolver la discusión planeada hacia una respuesta concreta. En primer lugar cabe abordar y superar un interrogante que quizás muchos se han hecho ante las noticias y denuncias por hacinamiento carcelario: ¿Por qué no construyen más cárceles para que no haya necesidad de dejar libre a tanto delincuente?

Pues bien, el gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, llegó a considerar la vinculación de la empresa privada -vía sociedades mixtas-, en la construcción y/o suministros de nuevos centros penitenciarios (como parte de su visión de la política criminal, de cierta textura inestable), en un intento por importar el modelo chileno en la materia, y con lo cual aspiraba a evitar la corrupción cancerosa y contagiosa propia de las instituciones públicas colombianas, reducir el costo de sostenimiento per cápita de los reclusos y obviamente solucionar el problema de hacinamiento en las cárceles.

Sin embargo, como lo revela el reciente informe de la Comisión Intersectorial para el Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio (CISPA, 2014),

Colombia es el tercer país de América Latina en población carcelaria. En la actualidad hay 138 centros penitenciarios con 156.924 personas privadas de la libertad. Esto le cuesta al año cada una de ellas al Estado:

Funcionamiento: 11.541.314 pesos

Gastos generales: 1.368.087 pesos

Si las 40.691 personas que actualmente están sindicadas por algún delito pero no han sido condenadas no hubieran sido enviadas a un centro de reclusión, el Estado habría ahorrado más de 43.000 millones de pesos.

Lo anterior conduce a otra discusión abierta e inconclusa acerca de modelos penitenciarios cooperativos y auto-sostenibles, que escapa al objeto de investigación. Es apenas imaginable estimar que tampoco la corrupción ha sido evitada; ahora adquiere un nivel más de lobby y de carruseles de contratación a la hora de entrar a disfrutar de semejante negocio.

La respuesta concreta sería entonces de una mano, que Colombia no cuenta con fondos suficientes para invertir en centros penitenciarios, al menos desde una visión paternalista de Estado. De otra mano, se está experimentando la aproximación de la senda de dos variables técnicamente destinadas a chocar: El crecimiento matemático de los recursos del Estado y el crecimiento geométrico de quienes delinquen. Los recientes hechos de violencia que se están presentando en el país, han llamado la atención del gobierno, el cual atribuye la situación a las huellas de los grupos armados y el narcotráfico que, de manera insospechada, causaron una devaluación de la vida en el inconsciente colectivo colombiano y ante lo cual no se han dado respuestas efectivas en materia de educación y liderazgo, ni al interior de los centros de reclusión, ni a la población en general, para disuadir o prevenir la comisión de injustos.

Perea (2012), aporta un cotejo de cifras, que en todo caso resulta incierto en exactitud; el uso de métodos distintos de medición, arroja cifras conflictivas. No obstante, señala que “Si bien el crimen organizado es una realidad en el mundo y crece exponencialmente en América Latina, hay muestras de que en Colombia esa cultura que genera reacciones brutales en la vida diaria es más generalizada”.

Así mismo, Perea (2012), comparó el caso de ciudades colombianas con México y Centroamérica, y encontró que mientras en estos países el crimen organizado es responsable hasta de un 92 por ciento de las muertes, en Colombia hay mayor participación de la sociedad en los actos de violencia, y prácticas macabras como las limpiezas sociales han convertido en rutinario cierto tipo de muertes, como las de consumidores de drogas o ladronzuelos. La frase "si lo mataron fue por algo" es un reflejo

de cómo la normalidad del homicidio y la atribución de la culpa a la víctima -no al asesino- son peculiaridades de esta sociedad. En ese mismo sentido se pronunciaron otros analistas sobre el tema, de manera sucinta:

El sacerdote jesuita Horacio Arango, que estudia desde hace años la violencia en Antioquia, dice que en Colombia no se logró construir una ética pública fuerte, de respeto al otro, en medio de un proceso de modernización y urbanización acelerado, y que terminaron imponiéndose los valores del narcotráfico, "del dinero y el poder por encima de la vida humana [...] el que puede instaurar una ética de la vida es el Estado, pero si navega en la corrupción, es muy complicado".

El semiólogo Armando Silva añade a este quiebre social y moral el caos de la vida urbana. "Estamos apiñados, no hay aire, el tráfico es complicado, eso genera rabias. Son agentes estresantes de la acción violenta. Tan estresada vive la gente que hay actos de violencia cotidiana que muestran que cada uno vive a su manera sus "días de furia". El historiador Jorge Orlando Melo cree, en la línea conceptual de la cultura ciudadana, que la explicación reside en una combinación de factores: una sociedad mata (o se agrede) más o menos dependiendo de las condiciones sociales, que determinan qué tan favorable es el entorno para el delito; de las oportunidades de beneficio que perciben los criminales y de la fuerza de las barreras éticas, culturales y legales frente al crimen. "La aceptación de la violación de la ley en casos menores facilita la aceptación de la violación más grave", dice (Semana, 2011).

Con esta serie de criterios de experto, se puede apreciar -y se pretende demostrar- que el tema a abordar en la agenda de la política criminal del país, no sería la construcción de más cárceles a las que vaya más gente presa, o incrementar las penas para que en el tiempo más sorprendente las nuevas instalaciones estén llenas, conozcan el hacinamiento y la violación de derechos humanos, en fin, un nuevo nivel en la espiral de degradación social que está echada a la puerta esperando el momento para entrar con todo vigor, sino más bien, preparar una renovación cultural partiendo de las instituciones del Estado para que las violaciones a los Derechos de los ciudadanos sean una vergonzosa cifra del pasado y exista una base sólida para empezar a demandar un mejor comportamiento.

Por ello es necesario conocer qué factores la aumentan y cuáles la disminuyen, a través de un diagnóstico del perfil de la población penal, que permita identificar: ¿quiénes son? Se debe tomar en cuenta que la motivación de los participantes es un elemento imprescindible en el diseño e implementación de los programas efectivos, pues ayuda a confirmar su intención de reinserirse.

Los intereses de los seres humanos son diversos, así como las habilidades de aprendizaje. Hay quienes responden mejor a trabajo grupal, otros a intervenciones individuales. Hay quienes por su nivel de educación no se beneficiarán de talleres que requieran mucha lectura. Hay otros cuya adicción les impedirá participar constructivamente de determinadas actividades.

Esto incluye el limitado acceso a educación formal, la escasa experiencia laboral, el consumo de drogas, actitudes pro delito, entre otros, poniendo énfasis en el desarrollo habilidades y en aquellos factores modificables. Los programas que abordan entre 4 a 6 factores dinámicos de riesgo de reincidencia pueden tener sobre un 30% de eficacia en la reducción de reincidencia (Gendreau et al., 2002). Los programas que no abordan factores de riesgo de reincidencia, pueden tener resultados nulos en la materia. Así, los programas exitosos cuentan con funcionarios que creen en la posibilidad de cambio de los infractores, que conocen la misión del programa y que han recibido capacitación para el logro de los objetivos deseados.

Se producen mejores resultados cuando se da continuidad al trabajo de los programas al interior de la cárcel, con los desarrollados en las comunidades a las que los reclusos regresan. En América Latina y el Caribe existen pocas experiencias que reúnan todos principios que acabamos de describir, siendo uno de los principales déficits la falta de diagnóstico y la reducida evaluación de los programas. No obstante, es posible identificar algunas experiencias relevantes en este ámbito.

3.3 El seguimiento de la medida una vez es aplicada

El art. 65 CP establece, a manera ejemplificativa, las obligaciones inherentes que debe cumplir el beneficiado con el otorgamiento de la libertad condicional así como al de la suspensión condicional de la ejecución de la Pena como se señala a continuación:

1. Informar todo cambio de residencia.
 2. Observar buena conducta (Numeral CONDICIONALMENTE exequible).
 3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.
 4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
 5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.
- (texto íntegro tomado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388>).

Aunque hubiese pasado como pintoresco para algunos, o ilógico u obvio para otros, un ciudadano en ejercicio de sus derechos interpuso una demanda contra el numeral segundo de este artículo solicitando que se especificase el sentido de “buena conducta”, aludiendo que se trataba de un concepto demasiado subjetivo y que el Estado no podía imponer modelos de conducta en el sentido ético o moral de la palabra; estos argumentos, ameritaron toda una interesante discusión acerca de la moral, la ética y el derecho pero que además, dejaron un claro ejemplo de las dificultades que en determinado momento podrían suscitarse en un debate judicial y que de no meditarse debidamente, podría resultar en una aplicación inadecuada de la Ley.

Así fue como la Corte Constitucional en Sentencia C-371 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil, determinó que la expresión acusada se refería a los deberes jurídicos emanados del art. 95 de la Constitución Nacional* como los consagrados en el resto de los numerales del presente artículo; de manera complementaria, los artículos 77 y 79 del

* En dicho artículo se habla por ejemplo de que “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

CP respectivamente, señalan que “el Juez está en la obligación de solicitar trimestralmente informaciones tendientes a establecer si la medida debe continuar, suspenderse o modificarse”, y que además,

La suspensión o cesación de las medidas de seguridad se hará por decisión del Juez, previo dictamen de **experto oficial** (negritas fuera de texto). Si se tratare de la medida prevista en el Artículo 72, el dictamen se sustituirá por concepto escrito y motivado de la Junta o Consejo Directivo del establecimiento en donde hubiere cumplido la internación, o de su Director a falta de tales organismos.

Es en este punto donde queda evidente que la Ley envía al beneficiario con una “Libertad negativa”, es decir, a no transgredir las restricciones y a conducirse más por temor o censura moral o por beneficio que por conciencia de la necesidad de no transgredir el ordenamiento jurídico/contrato social. No se evidencia la implementación de programas de reinserción ni de alianzas estratégicas con otras entidades del Estado como bien pudiera ser el ICBF, o las ONG’s como parte de esa función restaurativa, tal y como lo señala o recomienda inclusive un informe reciente del INPEC (2014), en el que se sugiere que:

Se deben generar estrategias interinstitucionales conducentes a crear entre los organismos gubernamentales, políticos y sociales de los departamentos y municipios, la importancia y compromiso de mantener bajo su responsabilidad aquella población reclusa que se encuentre en etapa de investigación, mientras que el INPEC se encarga de la atención integral al condenado.

Aspectos que en su momento y a su juicio, consideraba el Fiscal General de la Nación (E), Gustavo Morales Marín, se hallaban en la función punitiva:

Expresa el Fiscal General (E), que en el segundo evento, es necesario tener en cuenta que la pena tiene unas funciones de prevención especial y reinserción social, mediante las cuales se pretende la readaptación del condenado al medio social del cual se le ha desvinculado en razón del delito cometido. Agrega que en nuestro ordenamiento jurídico esos objetivos se logran a través del tratamiento penitenciario, “... concebido como el conjunto de medios educativos, instructivos, laborales, culturales, recreativos, deportivos y familiares que se implementan, con base en la dignidad humana y en las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto, para obtener la reinserción sociocultural.” (Intervención del Fiscal en la Sentencia C371 de 2002).

En realidad las tasas de reincidencia están en aumento y no hay evidencia de que la función punitiva *per se*, logre abarcar la dinámica educativa, instructiva, ni cultural ni laboral (sin mencionar los otros aspectos); hoy por hoy, sólo se devuelve a los sindicatos o investigados a sus casas sea por subrogados o por beneficios, pero no se le instruye ni se le guía hacia la sociedad, y se les penaliza a la primera falla. Así por ejemplo, según el informe del INPEC (2014) arriba citado,

[...] a 26 de octubre de 2014 se encontraban 18.284 personas reincidentes en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, domiciliaria y con control y vigilancia electrónica, por la comisión de 40.540 actos delincuenciales [...] En cuanto a los delitos por los cuales se judicializó a estas personas, el hurto se encuentra en primer lugar (29,6%), seguido del porte de armas (17,0%), el tráfico de estupefacientes (14,7%) y el homicidio (10,0%)

4. EL IMPACTO NEGATIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, EN LA SOCIEDAD COLOMBIANA.

Por el uso de una lógica deductiva y tomando como referencia lo expuesto en los apartes predecesores, y dejando claro que no existen estudios realizados sobre la materia de que se ocupa esta investigación, el principal efecto negativo que se deriva del acceso al mecanismo de suspensión condicional de la ejecución de la Pena es la tendencia a reincidir y con ello, la desconfianza de la población civil en sus autoridades e instituciones. Es cuestión de ordenar el criterio y la política criminal; se requiere de grandes inversiones y de una renovación cultural enorme porque existe la clara evidencia de que la solución no es endurecer las penas, ni crear nuevas limitaciones a la libertad de las personas, es cuestión de voluntad política.

Como también se señaló en su momento, es posible que se produzca una confusión judicial ante tantos cambios en tan poco tiempo; es posible que en poco tiempo, vía reincidencias, la situación empeore y supere a la crisis actual. Queda pendiente y fuera de los alcances de esta investigación dada la novedad de Ley, cómo va a ser ese lanzamiento masivo de personas culpables de algún delito de vuelta a la calle, si se traducirá en justicia privada o en perdón y olvido

A la fecha no se han publicado estudios sociológicos focalizados en esta premisa, porque bien ha pasado desapercibida, o precisamente es un reflejo del descuido del gobierno en medir los efectos de las políticas adoptadas; casi todas las políticas del Estado

han sido estudiadas de forma privada, particular, y casi toda la información yace en obras a veces inaccesibles o poco conocidas, cuando un ideal sería que toda esta información radicara entre las obras de seguimiento con un carácter científico y sociológico orientado a acompañar tanto a los individuos beneficiados como a la sociedad en general en todo lo relacionado con el aprendizaje y forjamiento de una cultura progresista, pacífica, no ajena al desarrollo integral de los seres humanos. Resta decir que uno de los efectos más negativos de la aplicación de esta política, es el incremento de la violencia (en forma de homicidios), la revictimización y las espirales de delincuencia.

5. CONCLUSIONES

El incremento del umbral de años para que más internos accedan al goce del beneficio de la suspensión condicional de la Pena, contemplado por el artículo 63 legal, ha constituido un avance transitorio hacia la solución de la grave crisis de derechos humanos al interior de los centros de reclusión y de reinserción social, toda vez que se ha optado por entregar tal función de manera indirecta a la sociedad; la repercusión directa se reflejaría en la calidad de vida de los internos, y con ello se podría lograr una mejor coherencia entre el sistema penal restaurativo y la funcionalidad de los centros de reclusión.

La política criminal del país de caras al espíritu de la justicia restaurativa que con mucha aclamación se presentó al país, es incipiente. Este asunto involucra gravemente a las instituciones y la administración de justicia. Las más recientes violaciones a los derechos de los ciudadanos provienen en un número no despreciable, de los funcionarios públicos y demás servidores judiciales.

Buena parte de las soluciones a los problemas penitenciarios de país, han sido coyunturales y copiadas de la literatura extranjera, desconociendo el contexto cultural donde surgieron y que se diferencia sustancialmente del local, por la misma historia de desarrollo y cultura. Se puede apreciar de lo dicho, que en Colombia los mecanismos de reinserción social son casi nulos, y los pocos que hay no cuentan con una dotación suficiente de recursos y/o espacios para el cumplimiento de sus funciones, ya que el ecosistema socio-económico colombiano no cesa de producir día a día situaciones de desigualdad, abusos, falta de solidaridad, todas las cuales finalmente se traducen en violencia y comisión de injustos.

Por todo esto es importante señalar que ante la insostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario del país, fruto de varios factores que se unieron para producir

los efectos que hoy en día se están viviendo, como el total ajuste dentro del sistema penal en Colombia, donde cada una de sus partes tiene una filosofía y accionar distinto que no se complementa, todo esto ha producido perjuicios a innumerables personas, creando un desorden social que necesita de un fuerte tratamiento, pues aunque se piense que es un tema aislado incumbe toda la nación, como medidas de contención, y mitigación se han venido realizando cambios en la política criminal del país queriendo reducir los efectos del hacinamiento, dentro de los cuales encontramos permitir de manera más fácil a los condenados poder solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, medida que necesita de un gran arraigo en la sociedad, y sobre todo necesita de la plena ejecución de la justicia restaurativa, promoviendo el dialogo entre víctima y victimario, para que se pueda materializar la resocialización y la reinserción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Aguilar, C. R. & Lima, M. A. (2009). ¿Qué son y para que sirven las políticas públicas?. Bogotá: contribuciones a las ciencias sociales.
- Bonfill G. (2014). *La eficacia de las suspensiones judiciales con obligación de tratamiento de deshabitación Factores que pueden influir en la reducción o no reincidencia*. España: Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (Departamento de Justicia) de Catalunya.
- Borja, E. (2003). Sobre el concepto de política criminal. Una aproximación a su significado desde la obra de Claus Roxin. ADPCP 51. 113-150.
- Cid, J. & Larrauri, E. (2005). La delincuencia violenta: ¿prevenir, castigar o rehabilitar? Valencia: Tirant lo Blanch,
- Farrall, S. (2002). Rethinking What Works with Offenders. Probation, Social Context and Desistance from Crime, Willan, Devon.
- Dufour, I., Brassard, R. & Guay, J. P. (2009). Sursis, récidive et réinsertionsociale: Un équilibre précaire. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 51(3), 303-327.
- Fernandez, J. (1982). Derecho Penal Fundamental. Bogotá: TEMIS
- Garraud, R. (1926). Précis de droit criminel, 14e édition, Recueil Sirey,
- Gendreau, P. (1996). The principles of effective intervention with offenders. In A. T. Harland (Ed.), Choosing correctional options that work: Defining the demand and evaluating the supply. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hurtado, J. (1997). Suspensión de la ejecución de la pena y reserva del fallo. Documento de internet. Disponible en: https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1997_10.pdf. Consultado en: 15 de febrero de 2015.
- Jaén, M. (2003). Suspensión y libertad condicionales: dos formas de inejecución de la pena privativa de la libertad.
- Jescheck, H. H. (2003). Situaciones de necesidad de las que derivan causas de justificación: Estado de necesidad agresivo y defensivo
- Lacassagne A., & Martin E. (1901). Des résultats positifs et incontestables que l'anthropologie criminelle peut fournir à l'élaboration ou l'application des lois, AAC, 1901, p. 539-541.
- Mair, G. (2004) "Diversionary and Non-supervisory Approaches to Dealing with

Offenders” en Bottoms, A., Rex, S. y Robinson, G. (ed), Alternatives to Prison, Willan, Culompton, 135-161.

Meny, Y. & Thoenig, J. C. (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Ariel.

Ripstein, D. (2009). La suspensión de la Pena. Material

Roxin, Claus (1997). Derecho penal. Parte general. Civitas, tomo I.

Tocora, F. (1997). Política criminal contemporánea. Bogotá: Temis.

Uprimny, R. & Guzmán, D. (2010). Política de drogas y Situación carcelaria en Colombia: TRANSNATIONAL INSTITUTE (

Velázquez, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto “Política Pública”. Desafíos (20), 149-0187.

Ward, t. & Maruna, s. (2007). Rehabilitation: Beyond the Risk Paradigm. Routledge.

PUGA Josefina,(1983) "Consecuencias Sociales del déficit habitacional en los sectores urbanos de mínimo ingreso" en : Mac Donald, J. "Vivienda Social-Reflexiones y Experiencias" CPU-Santiago de Chile

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL (2005). Sentencia C-823. Magistrado Ponente

Álvaro Tafur Galvis.

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL (2005). Sentencia C-194. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL (1998). Sentencia T- 153. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL (2013). Sentencia T-388. Magistrado Ponente: Fabio Moron Diaz

COLOMBIA, Corte Suprema de Justicia (2004). Proceso con radicado Nro. 19.445; M.P: Álvaro Orlando Pérez Pinzón, octubre 6 de 2004.

COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (2007). Sentencia 26065 de Marzo 21 de 2007. Disponible en la web a través de:

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (1991). Constitución Política, artículo, 41, 122.

Ley 599 de 2000, Código Penal Sustantivo, artículo 63.

Ley 890 de 2004, artículo 4.

COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CISP (2014) ¿Cuánto le Cuesta un preso al país? Artículo de

Internet. Disponible en: http://www.cispa.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1430:icualto-le-cuesta-un-presopalpais&catid=15:noticias-spa&Itemid=38. Consultado en: enero 30 de 2015.

DICCIONARIO VIRTUAL WORDREFERENCE (2013). Sursis. Disponible en internet en: <http://www.wordreference.com/fres/sursis>.

DICCIONARIO VIRTUAL WORDREFERENCE (2013). Probation. Disponible en internet en: <http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=probation>. Recuperado en 2013, 1 de septiembre.

ENCICLOPEDIA JURÍDICA (2010). Condena condicional. Disponible en la web a través de: <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/condena-condicional-suspensionde-la-ejecucion-de-las-penas-privativas-de-libertad/condena-condicional-suspensionde-la-ejecucion-de-las-penas-privativas-de-libertad.htm>. Recuperado en: 2013, 2 de septiembre.

REVISTA SEMANA (2011). Intolerancia. Disponible en la web a través de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/intolerancia/236074-3>. Recuperado en: 2013, 15 de septiembre.

REVISTA SEMANA (2010). Populismo punitivo, una moda que preocupa a la Fiscalía. Disponible en internet a través de: <http://www.semana.com/politica/articulo/populismo-punitivo-moda-preocupafiscalia/124309-3>. Recuperado en: 2013, 20 de septiembre.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE (2011). Probation and Parole in the United States. Disponible en internet en: <http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ppus10.pdf>. Recuperado en: 2013, 30 de agosto.

INPEC, Oficina Asesora de Planeación Grupo Estadística (2014) Impacto Ley 1709 de 2014 Segundo Informe.

INPEC, (septiembre, 2015) informe N° 9

INPEC, (agosto, 2015) informe N° 8